



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-231/2023

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE
LA MATA PIZAÑA¹

Ciudad de México, veintiocho de junio de dos mil veintitrés.

Sentencia que declara inexistente la omisión alegada por Ma. Martina Grifaldo Cervantes, Adan Olea Robles, Diodoro Vigil García y Francisco Mendoza Martínez, atribuida a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.

ÍNDICE

GLOSARIO	1
I. ANTECEDENTES	2
II. LEGISLACIÓN APLICABLE	2
III. COMPETENCIA	3
IV. PROCEDENCIA	3
V. ESTUDIO DE FONDO	4
1. Planteamiento del caso	4
2. Decisión	5
3. Justificación	5
VI. RESUELVE	8

GLOSARIO

Actores:	Ma. Martina Grifaldo Cervantes, ostentándose como militante y congresista nacional de Morena, y Adan Olea Robles, Diodoro Vigil García y Francisco Mendoza Martínez, ostentándose como militantes del indicado partido.
Autoridad responsable o CNHJ:	Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Juicio ciudadano o juicio de la ciudadanía:	Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tribunal Electoral:	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Del contenido de la demanda y de las constancias que integran el presente asunto se advierten los siguientes:

¹ **Secretario instructor:** Fernando Ramírez Barrios. **Secretarios:** David R. Jaime González y Gabriel Domínguez Barrios.

I. ANTECEDENTES

1. Queja partidista. El veintidós de mayo de dos mil veintitrés² la parte actora presentó de forma conjunta, por correo electrónico, queja ante el CNHJ por la supuesta violación a sus derechos políticos, calumnias públicas, daño moral, entre otras, contra una militante, en su calidad de consejera nacional de Mexicanos en el Exterior de Morena.

2. Juicio de la ciudadanía. El trece de junio, los actores presentaron demanda de juicio ciudadano contra la supuesta omisión de la CNHJ de tramitar el medio de impugnación anterior.

3. Turno. Recibidas las constancias en esta Sala Superior, el magistrado presidente ordenó integrar y turnar el expediente **SUP-JDC-231/2023** para su sustanciación a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

4. Cierre de instrucción. En su momento, el magistrado instructor radicó el asunto en su ponencia, admitió la demanda y declaró cerrada la instrucción en el juicio indicado.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE

El dos de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia electoral.³

Sin embargo, el veintidós de junio, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas, en la que determinó la invalidez del aludido decreto de

² En adelante, todas las fechas corresponden a dos mil veintitrés, salvo mención en contrario.

³ Mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley General de Partidos Políticos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo.



reforma en materia electoral.

En consecuencia, dado el sentido de la resolución de la SCJN, la normativa electoral que resulta aplicable es la anterior al decreto de reforma que ha quedado invalidado. Importa señalar que las resoluciones del máximo tribunal son obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas cuando sean aprobadas por cuando menos ocho votos.⁴

III. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, por tratarse de una demanda en la que se controvierte la omisión de un órgano nacional de justicia partidista de resolver un medio de impugnación interno relacionado con la posible violación a derechos político-electorales por parte de una persona que ostenta un cargo nacional, cometida en perjuicio de –entre otros– otra dirigente nacional del partido⁵.

IV. PROCEDENCIA

1. Estudio de la causal invocada

La CNHJ señala en su informe que la omisión alegada es inexistente, toda vez que el diecinueve de junio dictó un acuerdo de prevención en el asunto integrado con motivo de la queja presentada por la parte actora⁶; por lo que considera que el presente medio de impugnación debe sobreseerse en términos del artículo 11, inciso b), de la Ley de Medios.

⁴ Artículos 43 y 72, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución. En el caso concreto, la sentencia de la aludida acción de inconstitucionalidad fue aprobada por una mayoría de nueve votos.

⁵ Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 17, párrafo segundo, 41, párrafo segundo, base V, y 99, párrafos primero y cuarto, fracción X, de la Constitución Federal; 164, 166, fracción III, inciso c), y 169, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 83, párrafo 1, inciso a), fracción III, de la Ley de Medios.

⁶ Con clave de expediente CNHJ-EXT-083/23.

No le asiste la razón a la autoridad responsable, pues la existencia o inexistencia de la omisión reclamada es precisamente la materia del presente asunto; por lo cual, lo procedente es conocer el fondo de este, a fin de evitar incurrir en el vicio lógico de petición de principio.

2. Presupuestos procesales

El juicio ciudadano cumple con los requisitos de procedencia.⁷

1. Forma. La demanda se presentó por escrito; en ella se precisan los nombres de los actores, domicilio; la omisión impugnada; se expresan hechos y agravios, y constan las firmas autógrafas de quienes promueven.

2. Oportunidad. La demanda se presentó oportunamente⁸, pues ha sido criterio de esta Sala Superior que los efectos adversos generados por una omisión son de tracto sucesivo, al permanecer en el tiempo, en tanto no se dicte la determinación correspondiente.⁹

3. Legitimación e interés jurídico. Se cumplen, porque el juicio es promovido por personas ciudadanas por su propio derecho, quienes dicen ser parte quejosa en el medio de impugnación partidista cuya omisión de tramitar reclaman.

4. Definitividad. Esta Sala Superior no advierte algún otro medio de impugnación que la parte actora deba agotar antes de acudir a esta instancia, con lo cual se debe tener por satisfecho el requisito.

V. ESTUDIO DE FONDO

1. Planteamiento del caso

⁷ En términos de los artículos 4, párrafo 2, 7, 8, 9, párrafo 1, 12, párrafo 1, inciso a) y 13, de la Ley de Medios.

⁸ En términos de lo previsto en el párrafo 1 del artículo 8 de la Ley de Medios.

⁹ Véase la jurisprudencia 15/2011, de rubro: “**PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES**”.



La parte actora señala que el veintidós de mayo presentó ante la responsable una queja por la supuesta comisión de violaciones a sus derechos políticos, calumnias públicas, daño moral, entre otras, contra una militante, en su calidad de consejera nacional de Mexicanos en el Exterior de Morena.

Asimismo, relata que en la misma fecha recibió un mensaje de confirmación de la recepción de su queja.

En ese sentido, controvierte la omisión, por parte de la CNHJ de Morena, de dar el debido trámite a su queja partidista, lo que considera vulnera su derecho de acceso a la justicia al no existir pronunciamiento de la responsable respecto a la admisión o desechamiento de la misma.

2. Decisión

Esta Sala Superior estima **infundado** el agravio de la actora, en cuanto a que la CNHJ ha omitido tramitar en tiempo y forma su queja, pues de constancias se advierte que ha desahogado las fases del procedimiento conforme a la normativa del partido.

3. Justificación

Marco jurídico

El acceso a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial es un derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución, el cual dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes.

Este derecho también está reconocido al interior de los partidos políticos. Conforme a la Ley General de Partidos Políticos, estos tienen el deber de contar con órganos que impartan justicia en su interior y garanticen el ejercicio de los derechos de su militancia, respetando los plazos previstos en su normativa interna para tal efecto.

Así, son características indispensables del sistema de justicia interna de los partidos el que las resoluciones se emitan de forma pronta, expedita, respetando las formalidades esenciales del procedimiento, así como que sean material y formalmente eficaces para restituir a sus afiliados en el goce de sus derechos político-electorales.

En este contexto, este Tribunal ha sostenido la relevancia de que los órganos de justicia partidista privilegien el trámite y la resolución oportuna de los asuntos que se sometan a su conocimiento, a fin de brindar certeza a la militancia del partido.¹⁰

En el caso de Morena, el artículo 47, segundo párrafo, de su Estatuto, prevé el sistema de justicia partidaria y señala que este garantizará el acceso pronto, expedito y pleno a la justicia.

Asimismo, el Reglamento de la CNHJ establece los plazos a seguir para el debido trámite de las quejas relacionadas con presuntas faltas cometidas **fuera de un proceso electivo**, que se tramitan vía **procedimiento sancionador ordinario**.

En lo que interesa, la norma aplicable del Reglamento prevé que cualquier actuación relacionada con el análisis de los requisitos de procedibilidad de la queja, así como el acuerdo de admisión, desechamiento o, en su caso, la prevención para subsanar los requisitos debe sujetarse al plazo de treinta días hábiles en el caso del procedimiento sancionador ordinario (artículos 21 y 29 del Reglamento).¹¹

¹⁰ Véase el SUP-JDC-899/2022 y el diverso SUP-JDC-1051/2022.

¹¹ Cabe aclarar que, si bien el contenido del artículo 29 del Reglamento de la CNHJ se refiere al plazo para la emisión del acuerdo de admisión habiéndose cumplido los requisitos procesales, al analizar el diverso artículo 41 (que prevé el plazo para emitir el acuerdo de admisión en el procedimiento sancionador electoral) en el juicio SUP-JDC-162/2020, la Sala Superior razonó que se trataba del **plazo para el análisis de los requisitos de procedibilidad**, debiendo ser de cinco días, aplicando los razonamientos de la Jurisprudencia 23/2013 de rubro **“RECURSO DE APELACIÓN. EL PLAZO PARA VERIFICAR LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD NO PUEDE SER MAYOR AL PREVISTO PARA RESOLVERLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”**.

En este entendido, se considera que **aplican las mismas razones al procedimiento sancionador ordinario** previsto en el Reglamento, por diferir únicamente en el plazo.



Caso concreto

En el caso, no le asiste la razón a la parte actora en cuanto a que la responsable ha sido omisa en el trámite de su queja, pues de las constancias que obran en el expediente y del informe circunstanciado, se advierte que la CNHJ ha cumplido con los plazos previstos en la normativa para tramitarla.

En efecto, la omisión atribuida a la responsable **es inexistente**, en virtud de que la CNHJ emitió una actuación sobre el análisis de los requisitos de procedencia de la queja dentro del plazo reglamentario de treinta días hábiles previsto para el efecto.

Esto, pues la queja fue presentada el veintidós de mayo y el acuerdo de prevención fue dictado y notificado a la parte quejosa el diecinueve de junio; es decir, entre la presentación de la queja y la primera actuación de la CNHJ transcurrieron veinte días hábiles.

Así, resulta evidente que se no se incumplieron los plazos previstos en la normativa interna para la tramitación del medio de impugnación.

No es óbice a lo anterior, que de conformidad con el Estatuto de Morena¹² existen plazos diferenciados para la tramitación de quejas de la naturaleza de la que da origen al presente juicio.

Lo anterior, en primer lugar, porque en el presente asunto no es materia de *litis* la vía por la cual la responsable tramitó la queja correspondiente, que se trata de un procedimiento sancionador ordinario. En segundo lugar, porque la parte actora en ningún momento controvierte los plazos aplicables a su queja, sino únicamente que la misma no se hubiera tramitado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

¹² Artículo 49 Ter, inciso g), adicionado mediante el III Congreso Nacional Ordinario de Morena.

VI. RESUELVE

ÚNICO. Es inexistente la **omisión** reclamada.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación atinente.

Así lo resolvieron, por **mayoría**, las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. El secretario general de acuerdos da fe de la presente ejecutoria y de que esta se firma de manera electrónica.



VOTO PARTICULAR DEL MAGISTRADO REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-JDC-231/2023, RELACIONADO CON LA SUPUESTA OMISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA DE TRAMITAR UNA QUEJA PARTIDISTA

De manera respetuosa, emito el presente voto particular, porque, contrario a lo que sostiene la mayoría, considero que en el caso sí se actualiza la omisión de la CNHJ de Morena de tramitar la queja partidista. En el caso, la queja partidista es en materia de violencia política de género¹³, por lo cual, conforme al artículo 49 Ter, inciso g), numeral V, del Estatuto, la CNHJ debió determinar sobre la admisión en un plazo máximo de cinco días. De tal forma que, al no haberse emitido algún acuerdo con relación a la admisión o alguna actuación procesal necesaria, la CNHJ no cumplió con su obligación establecida en el Estatuto. Además, considero que el criterio sostenido está validando el incumplimiento de las obligaciones de la CNHJ y le exige una carga procesal desproporcionada a la parte actora.

1. Precisión de la materia de controversia

El veintidós de mayo, una militante y tres militantes presentaron una queja, vía correo electrónico, en contra de la consejera nacional de Mexicanos en el Exterior de Morena, por posibles violaciones a sus derechos políticos, conductas difamatorias, calumnias públicas, daño moral, prácticas de denostación, daños psicológicos, violaciones a derechos humanos, VPG y las infracciones que resulten.¹⁴ En este sentido, la materia de la queja es, de entre otros, la actualización de posibles actos de VPG.

El trece de junio, dichos militantes, ante la falta de respuesta sobre la admisión o desechamiento de la queja, presentaron un juicio de la ciudadanía ante el mismo partido. A partir de ello, el diecinueve de junio,

¹³ VPG.

¹⁴ Página 6, de la demanda de juicio de la ciudadanía.

la CNHJ previno a la y los militantes para que subsanaran diversas omisiones y deficiencias en su queja.

2. Decisión de la mayoría

La resolución aprobada determinó como inexistente la omisión reclamada por la parte actora, relativa a que la CNHJ omitió dar trámite en tiempo y forma a su queja. En el caso, se sostuvo que la queja debía tramitarse vía procedimiento sancionador ordinario, aun cuando la materia de la queja tuviera una tramitación distinta,¹⁵ con lo cual, la CNHJ tenía treinta días hábiles para emitir el acuerdo de admisión, desechamiento o, en su caso, la prevención.

En este sentido, se sostiene que no le asistía la razón a la parte actora, pues de las constancias que obran en el expediente y del informe circunstanciado, se advertía que la CNHJ había cumplido con los plazos previstos en la normativa para tramitarla. Esto, pues la queja fue presentada el veintidós de mayo y el acuerdo de prevención fue dictado y notificado a la parte quejosa el diecinueve de junio; es decir, entre la presentación de la queja y la primera actuación de la CNHJ transcurrieron veinte días hábiles.

Por lo tanto, se consideró evidente que en el caso no se incumplieron con los plazos previstos en la normativa interna para la tramitación de la queja.

3. Razones de mi disenso

Respetuosamente, no comparto la posición de la mayoría, ya que no se está respetando lo establecido en la tramitación de las quejas en materia de VPG que establece el Estatuto de Morena, está validando el incumplimiento de las obligaciones de la CNHJ y se le está exigiendo una

¹⁵ Artículo 49 Ter, inciso g), adicionado mediante el III Congreso Nacional Ordinario de Morena.



mayor carga procesal a la parte actora. De esta manera, en mi consideración, la CNHJ sí fue omisa en dar un debido trámite a la queja de la militancia.

El Estatuto de Morena, en su artículo 49 Ter, establece las directrices y bases generales con relación a la investigación y sanción de la VPG dentro de su partido. En concreto, el inciso g) del artículo en cuestión señala que las quejas en materia de VPG serán sustanciadas mediante el procedimiento sancionador electoral y, en el numeral V, que la CNHJ determinará sobre la admisión en un plazo máximo de cinco días, y si ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

De esta manera, contrario a lo sostenido en la sentencia aprobada por la mayoría, la queja no estaba sujeta a las reglas del procedimiento sancionador ordinario, el cual establece que la CNHJ tiene treinta días hábiles para emitir y notificar a las partes del acuerdo de admisión, sino que le eran aplicables las del procedimiento sancionador electoral y sus plazos. Es decir, al recibir la queja, la CNHJ tenía únicamente cinco días para pronunciarse sobre la admisión o, en su caso, haber emitido la prevención.

Entonces, puesto que la queja se presentó el veintidós de mayo, la CNHJ tenía hasta el veintinueve de mayo para pronunciarse sobre la admisión. De tal forma que al momento en que se interpuso la demanda (trece de junio) y se realizó la prevención (diecinueve de junio), es claro que el plazo para tramitar la queja ya había transcurrido y se actualizó la omisión señalada por la parte actora. Por lo tanto, desde mi consideración, sí se actualiza la omisión reclamada.

Tampoco comparto que la sentencia aprobada por la mayoría sostenga que la naturaleza de la queja no sea un elemento determinante para establecer los plazos a los cuales se encontraba sujeta la queja intrapartidista y que dicho aspecto no es materia de la litis. Desde mi consideración, dichos elementos eran fundamentales para determinar si

era existente o no la omisión, porque la pretensión de la parte actora era que se tramitara su queja y que no habían obtenido alguna respuesta procesal.

Bajo esa misma línea, considero que no se está garantizando dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto del mismo partido. Aun de mayor importancia, que no se está respetando y garantizando los esfuerzos del partido para regular y atender la VPG ni se toman las medidas para proteger a las posibles víctimas de estos actos.

Asimismo, no comparto que en la sentencia aprobada por la mayoría se sostenga que la parte actora debió controvertir la vía y los plazos, cuando su pretensión partía de no haber recibido alguna respuesta con respecto a su queja, con lo cual se demostraba que no conocían la vía ni los plazos a los que se encontraban sujetos. Así, dicho requisito resulta excesivo y en contravención de los derechos de la militancia.

Por lo tanto, considero que sí se actualiza la omisión reclamada, por lo que formulo el presente **voto particular**, en los términos precisados.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.